que se refiere el apartado segundo del precitado artículo, y en consecuencia proceder, en su caso, al requerimiento de subsanación pretendido por el recurrente.

La hipotética tardanza en la expedición de los certificados acreditativos de la privación de libertad, no es óbice para que la solicitud sea presentada en el plazo establecido en las bases de la convocatoria pública.

Conforme se desprende del oficio de 6.2.2002 del Ministerio de Defensa por el que se remite al recurrente Certificado de permanencia en Campos de Concentración, la solicitud en la que se basa el Ministerio para generar el certificado es un escrito de fecha 18.9.2001, posterior por lo tanto a la fecha en la que concluía el plazo de la convocatoria, el 27.7.2001.

La discrepancia puesta de manifiesto por el recurrente respecto al cómputo del plazo de seis meses para la presentación de solicitudes no es sino una discrepancia respecto a los criterios fijados en el Decreto que regula la convocatoria de la que trae causa el acto impugnado, y como tales debieron de ser en su momento impugnados. Esta discrepancia no puede subsumirse en ninguna de las causas de nulidad o anulabilidad a las que se refieren los artículos 62 y 63 de la LAP.

Cuarto. Contrariamente a lo que interpreta el recurrente en el segundo de los motivos de impugnación, la desestimación por extemporánea de la solicitud presentada por el recurrente para la participación en la convocatoria pública de referencia no supone negarle el derecho a ser reconocido «como víctima». El Decreto 1/2001, en la convocatoria que se impugna, tiene como objeto, atendiendo a lo dispuesto en sus artículos 7 y 10, obtener los datos necesarios a los efectos de, conforme dispone el artículo 1.b), fijar en un posterior Decreto las indemnizaciones y requisitos para de esta manera dar por concluido el procedimiento para el establecimiento de las indemnizaciones respecto a los ex presos o represaliados políticos que sufrieron privación de libertad por menos de tres años.

De conformidad con lo expuesto debe concluirse que la Orden impugnada es ajustada a derecho al haberse actuado conforme a lo dispuesto por las Bases de la convocatoria, y por tanto procede la confirmación de lo resuelto en la misma.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y demás normativa de aplicación,

RESUELVO

Desestimar el recurso de reposición formulado don Miguel Puñal Quesada contra la Orden de 24.4.2003 por la que se desestimó la solicitud por haber sido presentada fuera del plazo y confirmar la Orden impugnada en todos sus extremos por ser la misma ajustada a derecho.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía competente, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de septiembre de 2003.- El Secretario General Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2003, de la Secretaría General Técnica del recurso de reposición interpuesto por doña Bienvenida García López contra resolución de la Consejera de Justicia y Administración Pública de 20 de septiembre de 2002, por la que se desestima la inclusión en la base de datos a que se refiere el Decreto 1/2001, de 9 de enero.

Con fecha 19 de septiembre de 2003, se ha dictado resolución por el Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Conse-

jería de Justicia y Administración Pública al recurso interpuesto por doña Bienvenida García López en el expediente de referencia.

Intentada por dos veces la notificación, con fechas 7.10.2003 y 28.10.2003 respectivamente, y no habiéndose podido practicar como consecuencia de domicilio desconocido, se procede a notificar por medio de anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, según prescribe el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, la siguiente Resolución.

En la ciudad de Sevilla, a 19 de septiembre de 2003.

Visto el Recurso de referencia y sobre la base de los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de la Excm. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública de 20 de septiembre de 2002 se resolvió desestimar a doña Bienvenida García López la inclusión en la Base de Datos a que alude el artículo 10 del Decreto 1/2001, de 9 de enero, por el que se establecen indemnizaciones a ex presos y represaliados políticos que sufrieron privación de libertad como consecuencia de los supuestos previstos en la Ley 46/1997, de 15 de octubre, de Amnistía, por no cumplir los requisitos establecidos en la Sección 2.^a del Decreto, por cuanto no ha quedado acreditado el cumplimiento por don Antonio García Molina -ex preso- de períodos de privación de libertad efectiva por delitos de los contemplados en la Ley 46/1977.

Segundo. Contra la anterior Resolución, en fecha 6 de noviembre de 2002, por doña Bienvenida García López se interpuso, en tiempo y forma, Recurso Potestativo de Reposición, cuyas alegaciones se dan por reproducidas en aras del principio de eficacia administrativa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para la resolución del Recurso de Reposición interpuesto corresponde a la Consejera de Justicia y Administración Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 10.4 del Decreto 1/2001, de 9 de enero.

Dicha competencia se encuentra delegada en el Secretario General Técnico de esta Consejería, en virtud de lo dispuesto por el artículo 4.5.a) de la Orden de 10 de noviembre de 2000, de delegación de competencias en diversos órganos de la Consejería (BOJA núm 138, de 30 de noviembre) en la redacción dada por la Orden de la citada Consejería, de 12 de diciembre de 2002 (BOJA núm. 2, de 3 de enero de 2003).

Segundo. El Decreto 1/2001 de 9 de enero, tiene por objeto establecer indemnizaciones económicas a los ex presos y represaliados políticos que sufrieron privación de libertad por un período de tres o más años, o bien establecer una convocatoria pública para la inclusión en una Base de Datos de los que sufrieron dicha privación por un período superior a tres meses e inferior a 3 años, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.

Para tener derecho a tales beneficios, los interesados deberán acreditar ante esta Consejería de Justicia y Administración Pública que cumplen con todos los requisitos exigidos por el Decreto 1/2001, y para ello el artículo 8.3 establece que la solicitud de indemnización o de inclusión en la Base de Datos deberá ir acompañada de, entre otros documentos, «fo-

tocopia autenticada o compulsada de los documentos acreditativos de los períodos de privación de libertad efectiva por motivos políticos que fueron amnistiados por la Ley 46/1977, de 15 de octubre».

Teniendo en cuenta lo anterior, y examinada la documentación aportada al expediente por doña Bienvenida García López debe concluirse que la misma no ha acreditado los períodos de privación de libertad sufridos por don Antonio García Molina en un campo de concentración nazi, puesto que la fotocopia aportada de un sobre y una carta de la Asociación «Amical de Mauthausen y otros Campos de todas las víctimas del nazismo de España», destinadas a su marido, únicamente evidenciarían que era miembro de dicha Asociación, pero no acreditan fehacientemente que estuviera prisionero en dicho Campo de Concentración como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía ni las fechas de entrada y salida del mismo, datos necesarios para poder calcular el período de privación de libertad.

Del mismo modo la Resolución de la Dirección de Gastos de Personal reconociendo a don Antonio García Molina la pensión de jubilación únicamente demuestra que el causante prestó servicios durante la guerra civil en el Cuerpo de Carabineros de la República, pero tampoco acredita período de privación de libertad alguno en establecimientos penitenciarios, disciplinarios o campos de concentración.

Por otra parte consta en el expediente un oficio de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa señalando que «consultados los organismo militares pertinentes, no aparecen en los mismos antecedentes relacionados con la permanencia en Campos de Concentración ni Batallones disciplinarios de soldados trabajadores relativos a don Antonio García Molina».

En consecuencia, debe concluirse que ha sido acreditado en el caso que nos ocupa el período de privación de libertad sufrido por don Antonio García Molina en el Campo de Concentración nazi al que se refiere la recurrente y que, por tanto, al no haberse demostrado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por el Decreto 1/2001, procede confirmar la Resolución recurrida por ser ajustada a derecho.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y demás normas de aplicación,

RESUELVO

Desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por doña Bienvenida García López y confirmar la Resolución de la Consejera de Justicia y Administración Pública de 20 de septiembre de 2002 en todos sus extremos por ser la misma ajustada a derecho.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía competente, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de septiembre de 2003.- El Secretario General Técnico (Por delegación Orden 10 de noviembre de 2002), Carlos Toscano Sánchez

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

RESOLUCION de 6 de agosto de 2003 de la Dirección General de Fomento del Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública la subvención nominativa concedida al IFA destinada a la realización de actuaciones en el Centro Andaluz de Emprendedores.

En cumplimiento de lo establecido en el Título VIII, artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía, se resuelve hacer públicas las ayudas concedidas durante el tercer trimestre de 2003.

El abono de la subvención a que da lugar la Resolución Nominativa, se realizará con cargo al crédito cifrado en la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa 32B, y se hará con cargo a las aplicaciones indicadas a continuación.

Con cargo a la Aplicación 740:

Entidad: Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

Subvención: 785.000 euros.

Sevilla, 6 de agosto de 2003.- La Directora General, Esperanza Perea Acosta.

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace pública la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública y el artículo 18 de la Ley 14/2001, de 28 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2003, y en el artículo, 13.7 de la Orden de 18 de abril de 2001 (BOJA 58, de 22.5.01), por la que se regula la concesión de Ayudas para la Industria Minera «PYMES», esta Delegación Provincial ha resuelto hacer pública la subvención concedida, al amparo de la citada Orden a la empresa que a continuación se relaciona:

Orden de 18 de abril de 2001 de Ayuda a la Industria Minera «PYMES».

Beneficiario: Cerámica Marcos, S.L.
Aplicación: 0.1.13.00.17.04.77400.74A.9.
Subvención euros: 98.608,12.

Almería, 22 de octubre de 2003.- El Delegado, Clemente García Valera.

ACUERDO de 24 de octubre de 2003, de la Delegación Provincial de Huelva, de ejecución subsidiaria de diversas tareas en las instalaciones de Filón Sur, SA en el paraje La Tiesa, en el término municipal de Alosno (Huelva).

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos, Acuerdo de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Huelva a la entidad Filón Sur, S.A., en el domicilio conocido Paraje «La Tiesa», s/n de Alosno, Huelva, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presente a tenor de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero:

Visto el informe elaborado por el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación, sobre la situación de las instalaciones de la empresa Filón Sur, S.A. en el paraje «La Tiesa» en el término municipal de Alosno (Huelva), resultan los siguientes,

ANTECEDENTES

Primero. En fecha de 8 de julio de 2003 se recibe mediante fax en la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Huelva escrito remitido por el Alcalde Presidente de la Entidad Local Menor de Tharsis (Huelva) en el que se informa de que las instalaciones de la Empresa Filón Sur, S.A.